

Santiago, veintidós de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS Y OIDOS:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, en causa RUC 1900622017-K, RIT 240-20, por sentencia de diez de abril del año dos mil veintiuno, en procedimiento ordinario condenó a Ángel Paolo Cantillano Cabrera, a cumplir la pena de sesenta y un (61) días de reclusión menor en su grado mínimo, accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena, además de la accesoria de suspensión de la licencia de conducir por el lapso de un año, como autor de un delito culposo de homicidio, en grado de ejecución consumado, previsto y sancionado en los artículos 492, 490 N° 1, en relación al artículo 391 N° 2, todos del Código Penal, cometido en la ciudad de Quilpué, el día 8 de junio de 2019. La misma sentencia también lo condenó a cumplir la pena de tres (3) años y un (1) día de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, al pago de una multa de dos (2) Unidades Tributarias Mensuales y las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito previsto y sancionado del artículo 195 inciso 3° de la Ley 18.290, en grado de ejecución consumado, cometido en la misma ciudad y fecha.

Se dispuso el cumplimiento efectivo de las penas impuestas, comenzando por la más grave, sin que existan abonos que considerar.

La defensa del acusado dedujo recurso de nulidad contra dicha sentencia, el que fue admitido a tramitación, celebrándose la audiencia para su conocimiento el dos de febrero en curso, oportunidad en la cual la defensa se desistió de la



prueba ofrecida y aceptada, según da cuenta la respectiva acta agregada a estos autos.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en lo principal, la defensa invoca la causal de nulidad del apartado a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, la que prevé la nulidad del juicio oral y la sentencia cuando se hubieren conculcado, en cualquier etapa del procedimiento, o en la misma sentencia, derechos o garantías asegurados por la Constitución Política de la República o los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, al haberse vulnerado los artículos 290, 298, 308, 319, 325 y 329 del Código Procesal Penal; 8.2 letra f) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.3 letra e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Desarrollando el motivo de su agravio denuncia como infringida la garantía del debido proceso, pues no obstante que el Tribunal desestimó la solicitud de la defensa de modificar la fecha y forma de realización de la audiencia de juicio oral, decretando en cambio que este se realizara mediante la modalidad semipresencial, dicha regulación no fue respetada. En efecto, el único testigo principal, don Leonardo Aliaga Ugalde, no prestó declaración en su domicilio como había sido ordenado sino en la ciudad de Santiago y en compañía de otras personas. En consecuencia, atendidas las condiciones en que se rindió la prueba, ella carece de exactitud y fiabilidad, por lo que el tribunal debió restarle valor probatorio y absolver al acusado.

Termina solicitando que se acoja el recurso y se anulen el juicio oral y la sentencia, determinando el estado que hubiere de quedar el procedimiento, y ordenar la remisión de los autos a un tribunal no inhabilitado para la realización de un nuevo juicio oral.



SEGUNDO: Que, como causal subsidiaria, el recurso invoca la establecida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 195 incisos segundo y tercero de la Ley 18.290, la que desarrolla en tres segmentos.

En primer lugar, explica que el tribunal consideró que los hechos que tuvo por establecidos constituían además del delito culposo de homicidio previsto y sancionado en el artículo 492 en relación a los artículos 490 N° 1 y 391 N° 2, todos del Código Penal, el delito previsto en el artículo 195, en relación con el artículo 176, ambos de la Ley 18.290, por cuanto el acusado incumplió al menos dos de las obligaciones que impone el citado artículo 195, esto es, prestar el auxilio posible a la víctima y dar aviso a la autoridad policial más próxima, lo que – en criterio del recurrente- constituye un error de derecho.

Esgrime que la Ley N° 20.770, no sólo modificó la Ley del Tránsito en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad, sino también en relación a los accidentes de tránsito en que se producen lesiones o muerte, haciéndoles aplicable la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad. Sin embargo –en su concepto- atendido el fundamento heterogéneo de la punibilidad, el tipo penal requiere de la omisión copulativa de las tres conductas, siendo insuficiente para su configuración la omisión de una de ellas. En este sentido asevera, que el acusado detuvo su marcha, se bajó del vehículo, se acercó a la víctima y solicitó que se llamara a una ambulancia, lo que alega es la forma de prestar ayuda dada la dinámica de los hechos. Por ello su representado habría realizado dos de las tres conductas exigidas y en lo que concierne a la tercera, arguye que el acusado posteriormente se entregó a Carabineros y renunció a su derecho a guardar silencio. Así las cosas, pone de relieve que al no haberse incurrido en la omisión copulativa de las tres conductas exigidas no se configura el tipo penal.



Enseguida agrega que, tampoco es posible castigar al acusado por el delito consagrado en el art. 195 de la Ley de Tránsito sin incurrir en una infracción al principio de ne bis in ídem. En efecto, afirma que quien causa un accidente en el marco de la Ley del Tránsito, ya sea provocando lesiones o la muerte y no se detiene a prestar ayuda, realiza el injusto completo del delito de lesiones u homicidio según corresponda. Por ello, estima que el no prestar ayuda no puede ser considerado un delito autónomo sino un concurso aparente de leyes en relación de consunción de los tipos de homicidio y lesiones que absorben en su estructura al hecho de no prestar ayuda.

Finalmente, asevera que la obligación de auto-denuncia, adolece de problemas de constitucionalidad por afectar el derecho a guardar silencio del acusado.

Con esos argumentos termina solicitando la anulación de la sentencia y la dictación, de manera separada, de una de reemplazo que absuelva a su representado del delito contemplado en el artículo 195 inciso tercero de la Ley de Tránsito.

TERCERO: Que, como se advierte, la causal principal invocada por el recurso denuncia el agravio a la garantía constitucional del debido proceso, la cual está dada por no haberse desarrollado el juicio oral en la modalidad semipresencial bajo las condiciones que el mismo Tribunal estableció.

CUARTO: Que en lo referente a la garantía del debido proceso, se trata de un derecho sobre el cual existe actualmente coincidencia en que es el resultado de una larga evolución histórica e incorporado en Chile mediante el texto de la Constitución de 1980, en la que los comisionados entendieron el debido proceso como un principio que comprendía múltiples otras garantías judiciales y consideraron favorablemente la posibilidad de que su consagración cumpliera una



función integradora de los derechos fundamentales. Siguiendo esa línea, se prefirió un concepto cuyas precisiones pudieran ir evolucionando de acuerdo con el tiempo y ser recogidas y puntualizadas por la jurisprudencia. Con el ingreso al ordenamiento jurídico nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos (publicada en el Diario Oficial el 05 de enero de 1991) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (publicado con fecha 29 de abril de 1989), se reunió un extenso catálogo de garantías judiciales, que aparecen enunciadas, como tales, en dichas convenciones, descritas con precisión y especificidad. La reforma procesal penal, a propósito del derecho a un debido proceso, convirtió en función central de la judicatura asegurar el respeto de los derechos fundamentales a través de diversos sistemas de control, preventivos y correctivos, inmersos en distintas normas del Código Procesal Penal. En esta realidad normativa, resulta evidente que se impone a los jueces la utilización de los principios constitucionales como estándares a los cuales debe enfrentarse ya no sólo la legislación, sino también la conducta de los agentes de la persecución penal e, incluso, de los propios jueces.

El mensaje del Código Procesal Penal sostiene que deben explicarse los principios básicos que rigen el enjuiciamiento criminal, especificando los contenidos de la Constitución Política y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en que el eje del procedimiento está constituido por la garantía del juicio previo. *“Otro de los principios generales del sistema propuesto consiste en la aplicación directa de las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos relevantes en cuanto a la regulación del procedimiento penal. Esta disposición obedece a la necesidad de reforzar la noción de que el procedimiento penal se organiza a partir del desarrollo de los principios generales del ordenamiento jurídico que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos*



y que se encuentran recogidos en esos cuerpos normativos. En este sentido, se trata de resaltar la importancia de estos principios por sobre los mecanismos procesales específicos consagrados en la ley. Los jueces deberán trabajar integrando las normas procedimentales con las de carácter constitucional e internacional, interpretando y aplicando las primeras de modo que den cumplimiento a las exigencias contenidas en las dos últimas.” (Historia de la Ley N° 19.696, mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal, Biblioteca del Congreso Nacional, págs. 18-19).

Acorde con lo señalado, esta Corte ha sostenido consistentemente, en torno al debido proceso, que se trata de un derecho asegurado por la Constitución Política de la República que ordena que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y al efecto el artículo 19, N° 3°, inciso sexto, le confiere al legislador la misión de definir las condiciones de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal salvaguardia supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de resguardos que la Carta Fundamental, los tratados internacionales ratificados por Chile en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura, a vía de ejemplo, que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan impugnar las resoluciones con las que no estén conformes, en su caso que se respeten los procedimientos fijados en la ley con fidelidad a la Constitución y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas (SCS N° 6902-2012, de 6 de noviembre de 2012, N° 2747-13 de 24 de junio de 2013, N° 6250-2014, de 7 de mayo de 2014, N° 4269-19 de 25 de marzo de 2019, y N° 92059-20, de 8 de septiembre de 2020, entre otras).



QUINTO: Que en relación al agravio a la garantía del debido proceso, esta Corte ha resuelto uniformemente que su transgresión debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento. (SCS Roles N° 2866-2013, N° 4909-2013, N° 21408-2014, N° 4269-19, N° 76689-20, N° 92059-20 y N° 112392-20)

En este entendido, la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a la invalidez, pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal.

SEXTO: Que, en particular, en relación al reproche efectuado por la Defensa, es del caso subrayar, que tal como ha dicho esta Corte Suprema, las argumentaciones formuladas por la asesoría letrada, tienen el carácter de genéricas, esto es, dicen relación con criterios predicables a todos los juicios de esta clase, y por ello este planteamiento que se hace, claramente, no deriva de la realidad del juicio que nos ocupa. En este aspecto, lo único concreto que alega la defensa es que el testigo presencial Leonardo Aliaga Ugalde, no declaró en el juicio en los términos establecidos por el tribunal, esto es en su domicilio,



argumentando que su testimonio se prestó en Santiago y en presencia de otras personas, cuestionando por esta vía la exactitud y fiabilidad de la información proporcionada por el deponente, sin precisar acabadamente como aquello habría determinado la decisión de condenar a Ángelo Paolo Cantillano Cabrera atendida su trascendencia y entidad.

Como se evidencia, en esta fundamentación no se sostiene alguna vulneración de derechos o garantías constitucionales claramente identificables que hayan incidido causalmente en el resultado del juicio, de manera sustancial como lo previene la causal de nulidad empleada por la defensa. Por el contrario, según aparece del fundamento décimo segundo de la sentencia recurrida, el Tribunal haciéndose cargo de las argumentaciones de la defensa consideró que el individualizado testigo fue cuestionado por la defensa *“si estaba con otras personas o si había leído su declaración, reconoció que estaba en su trabajo con personas que no conocía y que no sabían de su declaración y que había recibido su declaración por correo, la que había leído los días previos, sin que se haya vislumbrado, por ejemplo, que la haya tenido a mano; de ser así, no hubiere incurrido en las imprecisiones que le hizo ver el propio fiscal”*.

En estas circunstancias no surgió dato alguno que restara mérito a sus dichos, de manera que los jueces dentro de sus facultades soberanas decidieron asignar pleno valor a tales declaraciones.

Complementando lo anterior, conviene aclarar que, la prueba rendida fue sometida al escrutinio de todos los intervinientes, así como del tribunal, bajo el respeto de los principios de bilateralidad de la audiencia, oralidad, publicidad e inmediación, de los que se colige la dualidad de posiciones, la contradicción y la igualdad de las partes; resguardos tenidos en consideración para tutelar la



garantía constitucional del debido proceso, especialmente en lo referido al derecho de la defensa, en su dimensión de controlar la prueba de cargo.

Con todo valga reiterar que el reclamante no explica a esta Corte –de la manera concreta y específica exigible en un recurso de derecho estricto- cuál es la precisa garantía constitucional personal que le fue desconocida con directa influencia en la sentencia condenatoria dictada en su contra. (SCS Rol N° 59504-20 de 22 de junio de 2020, Rol N° 104468-20 de 13 de octubre de 2020 y Rol N° 112392-20 de 3 de noviembre de 2020).

SÉPTIMO: Que, en consecuencia y por las razones antes desarrolladas, las contravenciones denunciadas carecen de sustento fáctico y de la sustancialidad que la hipótesis de nulidad en estudio exige para producir los efectos que le son propios, esto es, que sea insalvable ante el derecho al debido proceso, conforme ya se explicitó en los razonamientos que anteceden, razones por las cuales la presente causal será desestimada.

OCTAVO: Que en relación a la causal subsidiaria del recurso deducido, es del caso subrayar que la sentencia impugnada tuvo por establecidos los siguientes hechos: *“El día 08 de junio de 2019, alrededor de las 17:00 horas, el imputado Ángel Paolo Cantillano Cabrera se encontraba repartiendo pan, conduciendo un vehículo color blanco, marca Suzuki, modelo Carry, año 1998, placa patente RZ.9087, quien transitando por calle Gómez Carreño hacia el norte, al llegar a calle Mateo de Toro y Zambrano, El Belloto, Quilpué, enfrentó un disco “pare” existente en dicha intersección y tras realizar un viraje sin respetar dicha señalización, atropelló a la víctima María Teresa Vallejos Leiva, quien se encontraba cruzando la calle Mateo de Toro y Zambrano en un paso de cebra. Tras esto, el imputado descendió del vehículo y al percatarse de la gravedad de la situación decidió darse a la fuga, sin prestar la ayuda posible ni dar cuenta a la*



autoridad. Como consecuencia de lo anterior, la víctima resultó con lesiones de tal magnitud que le causaron la muerte”.

NOVENO: Que respecto a las alegaciones que se sostienen en el primer segmento de la causal subsidiaria del recurso, la sentencia impugnada explicitó que *“los hechos configuran igualmente, un delito del artículo 195, en relación con el artículo 176, ambos de la ley 18.290, en grado de ejecución consumado, por cuanto el acusado incumplió al menos dos de las obligaciones que impone la primera norma legal citada. Si bien el acusado detuvo su marcha al momento del atropello, dicha obligación es instrumental en relación con las otras dos obligaciones que pesaban sobre él como causante o partícipe del atropello, esto es, prestar el auxilio posible a la víctima y dar aviso a la autoridad policial más próxima. Respecto de la obligación de proporcionar ayuda, el acusado se limitó a acercarse a la víctima y solicitar que otros llamaran a la ambulancia, y cuando los testigos anunciaron una llamada a carabineros, huyó del lugar, razón por la que, desde el punto de vista objetivo se configura el tipo penal en examen, por cuanto las obligaciones son copulativas, lo que no implica que la figura típica exija el incumplimiento de todas las estas para su configuración, sino que por el contrario, basta que se haya incumplido alguna de las tres exigencias, para su concreción. Desde el punto de vista subjetivo, no cabe duda de que el acusado actuó con dolo directo, desde que, habiendo apreciado las consecuencias del atropello, huyó del lugar precisamente cuando terceros se aprestaban a avisar a la autoridad policial y eludió las obligaciones que pesaban sobre él. Ahora bien, en el caso en análisis, el acusado detuvo su marcha por lo que cumplió la primera obligación, pero luego, se limitó a acercarse a la víctima, pidió que llamaran una ambulancia, pero ni siquiera se cercioró de que ello fuera efectivo, ni mucho menos esperó su llegada, sino que estuvo breves momentos y huyó, sin dar aviso a la autoridad,*



concurriendo a carabineros, en agosto de 2019, varias semanas después del evento, y cuando ya estaba individualizado como el conductor del vehículo causante de la muerte de la víctima”.

En virtud de lo anterior el tribunal concluyó que “que sostiene que el delito del artículo 195 de la Ley de Transito exige copulativamente el incumplimiento de las tres obligaciones impuestas por el artículo 176; sin embargo, tal como lo señaló el tribunal -ya en el veredicto- lo cierto es que su exigencia por parte del legislador es copulativa, lo que se desprende de la técnica legislativa empleada que primero establece en una norma, las obligaciones a cumplirse, las que señala que “conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, prestar la ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata”, a la vez que el tipo penal se conforma con el incumplimiento de cualquiera de ellas, y esto se verifica precisamente porque el artículo 195 inciso 1º, para accidentes menores en que solo resulten daños, exigió al conductor únicamente una obligación (dar cuenta a la autoridad), mientras que en el inciso 2º, sancionó el incumplimiento de las tres exigencias, de forma tal que cualquiera de ellas hace merecedor al conductor participe, de la sanción impuesta. Ello es concordante con lo explicado supra, en el sentido que en un accidente con una consecuencia de tal gravedad (lesiones graves gravísimas o la muerte), las tres obligaciones resultan relevantes para el legislador, siendo la obligación de detenerse, una obligación meramente funcional a las otras dos que exigen prestar la ayuda posible y dar aviso a la autoridad, de forma tal que el legislador cauteló por un lado, la protección de la vida o salud de la persona afectada, como también protegió la imperiosa necesidad de sacar del anonimato de que usualmente goza el conductor en la vía pública. Así, el contenido del deber de detener la marcha implica quedarse en el lugar del accidente y, desde luego, no reiniciar la marcha,



vale decir, no abandonar dicho lugar. La obligación de dar cuenta a la autoridad policial, en este contexto, exige fundamentalmente esperar y tolerar la actuación del funcionario policial, en su labor de recoger la información sobre el accidente de tránsito. Ciertamente, implica también la actividad del conductor de dar información, pero el contenido de la misma se acota al suceso del accidente y a la participación de aquél en el mismo, por lo que no expone en demasía al obligado frente a los otros participantes y al Estado. La carga de deberes impuesta por el artículo 176 se vuelve abiertamente activa, solamente en la medida en que el accidente del tránsito con consecuencia de lesiones corporales da origen, a su vez, a una situación de peligro de un daño mayor a la salud o incluso para la vida de otro. Bajo este supuesto, la norma de conducta del artículo 195 inciso 2º, mediante remisión a los deberes del artículo 176, exige prestar la ayuda posible, a fin de evitar la realización de dicho peligro. Este deber de acción se legitima, en la medida en que su cumplimiento sirve a la protección de la integridad física y de la vida de otra persona. Además, el contenido de este deber se agota en prestar la “ayuda posible”, de modo que no exige asegurar la evitación del resultado adicional –de lesiones más graves o de muerte³. De esta forma es que las obligaciones copulativas por un lado, se convierten, para efectos de satisfacción del tipo penal, en aquello que en los delitos de acción serían modalidades de ejecución específica y alternativa, o, lo que es igual, un delito de actos alternativos o más propiamente de omisiones alternativas, donde el tipo prevé tres modalidades posibles de ejecución (u omisión, para ser precisos), en consonancia con las tres obligaciones legales establecidas”.

DÉCIMO: Que el artículo 176 de la Ley del Tránsito dispone que “En todo accidente del tránsito en que se produzcan lesiones o muerte, el conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, prestar la ayuda que



fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata, entendiéndose por tal cualquier funcionario de Carabineros que estuviere próximo al lugar del hecho, para los efectos de la denuncia ante el Tribunal correspondiente”. Por su parte, el artículo 195, inciso 2°, del mismo cuerpo legal prescribe que “El incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzcan lesiones, señalada en el artículo 176, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y multa de siete a diez unidades tributarias mensuales”. A su vez el inciso tercero dispone que “Si en el caso previsto en el inciso anterior las lesiones producidas fuesen de las señaladas en el número 1° del artículo 397 del Código Penal o se produjese la muerte de alguna persona, el responsable será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, multa de once a veinte unidades tributarias mensuales y con el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal. Para los efectos de determinar la pena prevista en este inciso, será aplicable lo dispuesto en los artículos 196 bis y 196 ter de esta ley. Las penas previstas en este artículo se impondrán al conductor conjuntamente con las que le correspondan por la responsabilidad que le pueda caber en el respectivo delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal”.

UNDÉCIMO: Que para resolver el asunto planteado en el recurso cabe recordar que el o los bienes jurídicos tutelados por una norma penal conforman un elemento esencial para guiar la correcta interpretación de la misma, desde que



mediante la amenaza de la punición, no se busca otra cosa que, en definitiva, proteger o alejar el riesgo de lesión de ese valor o interés cautelado.

En ese orden, el artículo 195 en estudio consagra un delito de omisión propia, que sanciona a los conductores que no realicen o ejecuten las tres acciones o conductas que tipifica, en el supuesto que trata -que en el accidente del tránsito en que participe se produzcan lesiones o muerte-, esto es, *“detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzcan lesiones”*, y únicamente con la ejecución de todas ellas puede estimarse que no se han puesto en riesgo o lesionado los bienes jurídicos que se pretende resguardar mediante la sanción penal con que se amenaza su desatención, esto es, la vida y salud de los afectados en el accidente como la correcta administración de justicia mediante la determinación de su responsable, así como el estado en que éste se desempeñaba en la conducción.

DUODÉCIMO: Que, aceptar lo postulado por el recurrente, -como ya ha señalado esta Corte- conllevaría que quedaría exento de sanción quien luego de causar un accidente con lesionados de gravedad, detiene la marcha y, sin dar cuenta a la autoridad, sólo observa como la víctima agoniza hasta su fallecimiento o, aquél que, después de ocasionar un accidente con lesionados de gravedad, no detiene la marcha ni presta la ayuda posible, sino que se retira a su domicilio, desde donde da cuenta a la autoridad del incidente. En ambos casos, la realización de una sola de las conductas exigidas no elimina o aminora el peligro o lesión de ambos bienes jurídicos referidos, requiriéndose para dicho fin satisfacer todas las conductas demandadas por la norma, único supuesto en el que la sanción penal no resulta justificada ni proporcional (SCS Rol N° 14955-18 de 11 de septiembre de 2018).



DECIMO TERCERO: Que en todo caso, para dirimir si se cumplieron o no las obligaciones impuestas por el artículo 176 de la Ley del Tránsito, a las que se remite el artículo 195, cabe recordar que tales aspectos de hecho fueron materia de prueba y debate en el proceso, por lo que es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal, ya que implicaría que este tribunal de nulidad, únicamente de la lectura de los testimonios “extractados” en la sentencia –como pretende el recurso-, podría dar por acreditados hechos distintos y opuestos a los que los magistrados extrajeron de esas deposiciones, no obstante que estos últimos apreciaron íntegra y directamente su rendición, incluso el examen y contra examen de los contendientes, así como hicieron las consultas necesarias para aclarar sus dudas, lo que de aceptarse, simplemente transformaría a esta Corte, en lo atinente a los hechos en que se construye esta causal de nulidad, en un tribunal de segunda instancia, y todavía más, en uno que -a diferencia del a quo- dirime lo factual en base a meras actas o registros -eso es sino el resumen de las deposiciones que hace el tribunal oral en su fallo-, lo cual, huelga explicar, resulta inaceptable.

DECIMO CUARTO: Que, así las cosas, constituyendo un hecho acreditado en la sentencia que el acusado no dio cumplimiento a todas las acciones que prescribe el artículo 176 de la Ley del Tránsito frente a un accidente en el que una persona resultó lesionada, se satisface la conducta descrita en el artículo 195,



inciso 3°, del mismo cuerpo legal, motivo por el que los jueces de la instancia no han errado al así declararlo, no pudiendo, por tanto, prosperar el inicial acápite de la causal subsidiaria.

DECIMO QUINTO: Que, en cuanto a la pretendida vulneración del principio ne bis in ídem, cabe tener presente que la ley no sanciona en estas normas el hecho causante de las lesiones o la muerte ni la conducción en estado de ebriedad, bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, pues se trata de un tipo penal autónomo, inteligencia que surge del tenor literal del inciso final del artículo 195, que regula aquellos casos en que se produzca un concurso de delitos, en que un mismo sujeto sea responsable de la muerte, lesiones y/o manejo en estado de ebriedad y, además, por el hecho típico independiente, como en este caso, consistente solo en el incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad, por lo que el proceso de subsunción de los hechos a este ilícito no merece reproche de derecho alguno, pues concurren en la conducta del imputado todos los elementos del tipo penal por el que se le ha sancionado (SCS Rol N°35715-17 de 20 de septiembre de 2017).

DECIMO SEXTO: Que, en relación al último segmento de la causal subsidiaria impetrada, por la cual se cuestiona la exigencia prescrita en el artículo 176 de la Ley de Tránsito consistente en “dar cuenta a la autoridad policial más inmediata”, por estimarla atentatoria del derecho del acusado a guardar silencio y a no autoincriminarse, es necesario tener presente que las garantías invocadas están contempladas en el artículo 7 del Código Procesal Penal, al referirse a la calidad de imputado. En efecto la norma dispone que: “Las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere



participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que de acuerdo con el precepto legal precitado, la calidad de imputado y, por ende, el ámbito de protección que le acompaña, como el derecho de guardar silencio, cuya omisión se denuncia por el recurso, se adquiere desde que el procedimiento se dirige en contra de una persona y más específicamente, desde que se le atribuye alguna participación en la comisión de un hecho punible.

DECIMO OCTAVO: Que, por ello la obligación que el artículo 176 de la Ley 18290 impone al conductor, al exigirle dar aviso personalmente a la autoridad policial, con la finalidad de obtener una colaboración con la acción persecutora del Estado, no se puede interpretar como una vulneración al derecho a guardar silencio porque no tenía la calidad de imputado.

DÉCIMO NOVENO: Que, de acuerdo a todo lo expresado, el recurso en análisis será rechazado.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los artículos 342 letra c) y d), 372, 373 letra a) y b) 376 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA EL RECURSO DE NULIDAD** deducido por la Defensoría Penal Pública, en representación del sentenciado Angelo Paolo Cantillano Cabrera en contra de la sentencia de diez de abril del año dos mil veintiuno, dictada en estos antecedentes RUC 1900622017-K, RIT 240-20 del Tribunal Oral en lo Penal



de Viña del Mar y el juicio oral que le antecedió, los que en consecuencia, **no son nulos.**

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

Rol N° 28917-21

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Sra. María Teresa Letelier R., y los Ministros Suplentes Sres. Rodrigo Biel M., y Miguel Vázquez P. No firma la Ministra Sra. Letelier, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.



En Santiago, a veintidós de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

